



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO
DEMANDANTE: NUBIA CRISTINA BOHORQUEZ NUÑEZ
DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
RADICACIÓN: 15001 33 33 004 2017 00185 00

Atendiendo al informe secretarial que antecede, ingresa para proveer respecto del mandamiento de pago.

Revisado el expediente se evidencia que la señora NUBIA CRISTINA BOHORQUEZ NUÑEZ acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control ejecutivo a fin de que se libre mandamiento de pago a su favor y en contra de la Nación – Rama Judicial, por los siguientes conceptos:

1. "Por la suma de **SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 70.970.185)**, por concepto del saldo de intereses moratorios causados sobre el monto de salarios y prestaciones sociales desde el 8 de octubre de 2013 (fecha de ejecutoria de la sentencia) hasta el 30 de mayo de 2016 (fecha de pago de la condena impuesta).
2. Por la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 10.740.889)** por concepto de la diferencia entre los sueldos y prestaciones indexados reconocidos en la resolución 0497 de 3 de junio de 2016 (\$228.206.562) y la suma que por el mismo concepto arroja la liquidación efectuada por la demandante (\$238.947.541), en tanto no se liquidó el mes de diciembre de cada año con el salario completo.
3. Por la suma **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS (\$ 16.660.321)**, por concepto de los intereses moratorios sobre los valores indexados de las cesantías y los intereses a las cesantías desde 8 de octubre de 2013 (fecha de ejecutoria de la sentencia) hasta el 30 de mayo de 2016 (fecha de pago de la condena impuesta).
4. Por los intereses moratorios liquidados sobre las anteriores sumas de dinero y a un monto de 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, desde el 1 de junio de 2016 hasta cuando se cancelen en su integridad.
5. Pago de costas y agencias en derecho.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Competencia

En los términos de los artículos 104 numeral 6 y 297 del C.P.A.C.A este Despacho es competente, para conocer de la presente ejecución, pues el proceso

tiene su origen en una condena impuesta por esta jurisdicción. Toda vez que se demanda por vía ejecutiva el valor de la condena, como resultado de la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de descongestión.

Igualmente, por razón de la cuantía, en tanto ésta no supera los mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que consagra el artículo 155 núm. 7 del C.P.C.A.

Caducidad

La demanda fue interpuesta dentro de la oportunidad legal que corresponde de conformidad al artículo 164 núm. 2, literal K del CPACA, por cuanto la sentencia cobro ejecutoria el **8 de octubre de 2013** (fl. 43 vto), y una vez transcurren los dieciocho (18) meses de que trata el art 177 del C.C.A, se advierte que no operó el término de la caducidad de los cinco años de que trata la norma, pues la acción ejecutiva fue promovida el **2 de noviembre de 2017** (fl. 99).

Del Título Ejecutivo:

El artículo 297 del C.P.A.C.A, contiene una enumeración de lo que constituye Título Ejecutivo para los efectos de esta jurisdicción, y en consecuencia señala los siguientes:

ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)

Como el fundamento de toda ejecución lo constituye el título que contenga la obligación cuyo cumplimiento se exige. Y se pueden ejecutar todas las obligaciones que se ajusten a los preceptos y requisitos generales del artículo 422 del Código general del Proceso, el cual dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley. ...”.

Al respecto, el Consejo de Estado, ha señalado que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (hoy art. 422 del C.G.P), estableció las condiciones formales y de fondo que debe reunir un documento para que de él se pueda predicar la existencia de título ejecutivo, se refiere a: **las condiciones formales**: las cuales buscan que los documentos que integran el título conformen una unidad jurídica, es decir, **que sean auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante, **de una sentencia de condena proferida por el juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, **o de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

De las condiciones de fondo: Buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.¹

En este caso tenemos que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo dictó sentencia en primera instancia el 10 de febrero de 2011 (fls. 11-30), dentro del proceso de NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con Radicación N° 150002331000-200501729-00 en la que se condenó a la Nación - Rama Judicial; dicha providencia fue confirmada en su integridad en fallo del 17 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Boyacá; la decisión cobró ejecutoria a partir de las cinco de la tarde (05:00 pm), del 8 de junio de 2013 según constancia Secretarial que obra a folio 43 vto, que además indica que es primera copia que presta mérito ejecutivo.

De lo anterior, podemos extraer, que el TITULO EJECUTIVO, base de la acción reúne las **condiciones formales**, de conformidad con el artículo 297 núm. 1 de la Ley 1437 de 2011.

Conforme a lo señalado procede el Juzgado a analizar si los documentos aportados reúnen los requisitos de **fondo**, recordemos, que hacen relación a la existencia de una obligación allí contenida, que sea clara, expresa y actualmente exigible; en tanto sólo cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda en el juez de instancia de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad, es procedente librar el mandamiento de pago, de lo contrario es deber del Juez denegarlo.

El artículo 422 del C.G.P, dispone que se puede demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos provenientes del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él. Respecto al requisito de la **claridad** de la obligación, exigido por el artículo 422, ibídem, es pertinente advertir que una obligación es ejecutivamente clara, porque en el documento que la contiene, constan todos los elementos que la conforman o le dan entidad, es decir, se conoce quien es el deudor, quien es el acreedor y lo debido, esto es, el objeto de la prestación cuya satisfacción se reclama. Se trata además de una obligación **expresa**, es decir, enunciada de modo inconfundible, porque contiene una obligación de pagar una suma de dinero por la suscripción de un título valor o contrato. En cuanto a la **exigibilidad**, porque no está sujeta a plazo ni condición, siendo la hora de hacerse exigible.

En el caso, los documentos que hacen parte del título ejecutivo, indican la existencia de una obligación a favor de la Ejecutante, señora **NUBIA CRISTINA BOHORQUEZ NUÑEZ** y a cargo de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, originada en la sentencia emitida primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho mencionada, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En dicha providencia se condenó a la **entidad demandada**, entre otras, a lo siguiente:

“(...) SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Entidad demandada, que proceda a dar posesión a la actora en el cargo de ESCRIBIENTE NOMINADO del Juzgado Segundo

¹ Consejo de Estado, C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

Laboral del Circuito de Sogamoso y le cancele los salarios y demás prestaciones dejados de percibir desde la fecha en que debió ser posesionada y hasta la fecha en que ésta se lleve a cabo, en el cargo de ESCRIBIENTE NOMINADO del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso, teniendo en cuenta lo señalado en la parte considerativa del presente proveído.

(...)

QUINTO.- El cumplimiento de la presente sentencia se efectuará en la forma y términos previstos por los artículos 176 a 178 del C.C.A.

(...). (Negrilla fuera de texto)

Así entonces, se advierte que en la sentencia se imputa una obligación **clara y expresa**, ya que la referida sentencia aunque fue proferida en abstracto, es liquidable mediante una operación matemática.

En cuanto a su **exigibilidad**, es pertinente, señalar que el plazo aplicable, es el contemplado en el artículo 177 del C.C.A., es decir, transcurridos los dieciocho (18) meses que contemplaba el artículo 177 del referido estatuto, por lo que se dio el 8 de abril de 2015.

Corolario de lo expuesto, considera este Juzgado, que de los documentos aportados como base de la presente ejecución, es posible predicarse su idoneidad como título base del recaudo, toda vez que reúnen las exigencias contempladas en el art. 422 del C.G.P., siendo procedente librar el mandamiento de pago solicitado, en tanto que los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda en el juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad y su condición de expresa, además de su exigibilidad.

En este contexto, el artículo 430 del Código General del Proceso, establece al respecto:

"ART. 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste merito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o en la que aquel considere legal..."

Conforme a la redacción de la norma, el Juez debe librar el mandamiento de pago, cuando se acompañe con la demanda, el documento idóneo completo que sirva de fundamento para la ejecución. En ese orden de ideas, se libraré el mandamiento de pago, conforme a lo sostenido por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, respecto a las opciones que tiene el juez frente a la demanda ejecutiva en los siguientes términos:

"En otras palabras, frente a la demanda ejecutiva el juez tiene tres opciones:

- 1) Librar mandamiento de pago cuando los documentos aportados con la demanda contienen una obligación clara, expresa y exigible, esto es, constituyen título ejecutivo.*
- 2) Negar el mandamiento de pago porque junto con la demanda no se aportó*
- 3) Disponer la práctica de las diligencias previas solicitadas en la demanda ejecutiva que cumplan los supuestos legales (art. 489 C. de P.C.), las cuales, una vez cumplidas,*

124

conducen al juez a proferir el mandamiento de pago si fueron acreditados los requisitos legales para que exista el título ejecutivo, o negarlo en caso contrario.”²

Ahora bien, a efectos de establecer si las sumas señaladas como pretensiones en la demanda, corresponden a los montos adeudados por la entidad, respecto de los cuales es procedente librar mandamiento de pago a favor de la señora **NUBIA CRISTINA** en contra de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, atendiendo la condena impuesta en la sentencia dictada dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 2005-1729, proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Rosa de Viterbo, el Despacho procede a realizar el estudio de los montos reclamados haciendo las siguientes precisiones:

La inconformidad de la parte actora con el pago de las sumas derivadas del título que aquí se plantea radica en síntesis en que: i) los intereses fueron liquidados por la entidad con DTF y no como lo exige el artículo 177 del CCA y como lo dispuso el título ejecutivo; ii) el salario del mes de diciembre no se tuvo en cuenta completo, olvidando que se ordenó pagar a título de indemnización y; iii) en la liquidación realizada para emitir la Resolución No. 4097 de 3 de junio de 2016 no se reconocieron intereses moratorios sobre los valores indexados de los intereses a las cesantías.

En primer lugar, se dirá que le asiste razón a la demandante cuando afirma que los intereses moratorios causados sobre la condena impuesta a la entidad en las sentencias que conforman el título ejecutivo base de la presente ejecución deben liquidarse conforme lo dispone el CCA y no el CPACA, por cuanto, por un lado, así fue establecido en la parte resolutive de las mismas y por otro la demanda que dio origen a las decisiones fue radicada en vigencia de dicho ordenamiento jurídico.

Ahora, en relación con el pago del salario completo del mes de diciembre que se reclama, se dirá que de conformidad con las normas que regulan el reconocimiento de esta prestación para empleados y funcionarios de la rama judicial -Decreto 1660 de 1978, Ley 270 de 1996- Ley 995 de 2005-, las vacaciones se liquidan atendiendo la sumatoria de (Asignación básica + prima de antigüedad + Gastos de Representación + Incremento 2.5 + Auxilio de Transporte Auxilio Especial de Transporte + Subsidio de Alimentación + prima ascensional + prima capacitación + una doceava de la Bonificación por servicios prestados + una doceava de la prima de servicios + una doceava de la prima de productividad) este total, se divide en 30 y se multiplica por el número de días de disfrute de vacaciones, según al régimen de vacaciones al que pertenezca el servidor judicial.

Así, para el caso de personas que disfrutaran de vacaciones colectivas, como las vacaciones inician el 20 de diciembre de cada año, por concepto de salario, únicamente se reconocen los 19 días laborados, situación idéntica ocurre en enero del año siguiente.

En el presente asunto, se evidencia que tal como lo dispone la norma el salario del mes de diciembre no se canceló por los 30 días calendario, sino en una proporción menor, la cual fue compensada con el valor reconocido por concepto de vacaciones.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, expediente 13103.

Sumado a lo anterior, advierte el Despacho que el mes de enero fue reconocido en su totalidad, sin hacer el descuento por razón de las vacaciones, por lo que por este aspecto que reclama la demandante, no hay lugar a lugar a librar mandamiento de pago.

Por último, en razón a que la parte actora echa de menos el reconocimiento de intereses moratorios, por la suma adeudada por cesantías e intereses a las cesantías, la liquidación que realizará el Despacho incluirá tales conceptos, en la casilla correspondiente a capital mensual.

CAPITAL INDEXADO HASTA LA FECHA DE EJECUTORIA, INDICADO EN LA RESOLUCION N° 4097 DE 03/06/2016	\$ 206.199.471
CESANTIAS E INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS CAUSADAS HASTA LA FECHA DE EJECUTORIA	\$ 18.167.547
TOTAL ADEUDADO A LA FECHA DE EJECUTORIA	\$ 224.367.018

INTERESES MORATORIOS								
Desde el día siguiente de la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de pago								
DESDE	HASTA	CAPITAL MENSUAL	CAPITAL ACUMULADO	TASA DE INTERES CORRIENTE BANCARIA	TASA INTERES MORA	TASA INTERES DIARIO	No DIAS	VALOR INTERES
09-oct-13	30-oct-13	\$ 1.326.743	\$ 224.367.018	19,85%	29,78%	0,072%	30	\$ 4.874.866
01-nov-13	30-nov-13	\$ 2.362.714	\$ 225.693.761	19,85%	29,78%	0,072%	30	\$ 4.903.693
01-dic-13	30-dic-13	\$ 7.865.471	\$ 228.056.475	19,85%	29,78%	0,072%	30	\$ 4.955.028
01-ene-14	30-ene-14	\$ 2.075.223	\$ 235.921.946	19,65%	29,48%	0,072%	30	\$ 5.080.389
01-feb-14	14-feb-14	\$ 2.075.223	\$ 237.997.169	19,65%	29,48%	0,072%	30	\$ 5.125.077
15-feb-14	28-feb-14	\$ 2.489.060	\$ 240.072.392	19,65%	29,48%	0,072%	14	\$ 2.412.557
01-mar-14	30-mar-14	\$ 2.075.223	\$ 242.561.452	19,65%	29,48%	0,072%	16	\$ 2.785.795
01-abr-14	30-abr-14	\$ 2.075.223	\$ 244.636.675	19,63%	29,45%	0,072%	30	\$ 5.263.326
01-may-14	30-may-14	\$ 2.151.271	\$ 246.711.898	19,63%	29,45%	0,072%	30	\$ 5.307.974
01-jun-14	30-jun-14		\$ 248.863.169	19,63%	29,45%	0,072%	30	\$ 5.354.258
01-jul-14	30-jul-14		\$ 248.863.169	19,33%	29,00%	0,071%	30	\$ 5.281.986
01-ago-14	30-ago-14		\$ 248.863.169	19,33%	29,00%	0,071%	30	\$ 5.281.986
01-sep-14	30-sep-14		\$ 248.863.169	19,33%	29,00%	0,071%	30	\$ 5.281.986
01-oct-14	30-oct-14		\$ 248.863.169	19,17%	28,76%	0,070%	30	\$ 5.243.338
01-nov-14	30-nov-14		\$ 248.863.169	19,17%	28,76%	0,070%	30	\$ 5.243.338
01-dic-14	30-dic-14		\$ 248.863.169	19,17%	28,76%	0,070%	30	\$ 5.243.338
01-ene-15	30-ene-15		\$ 248.863.169	19,21%	28,82%	0,070%	30	\$ 5.253.007
01-feb-15	14-feb-15		\$ 248.863.169	19,21%	28,82%	0,070%	14	\$ 2.451.403
15-feb-15	28-feb-15	\$ 681.270	\$ 249.544.439	19,21%	28,82%	0,070%	16	\$ 2.809.273
01-mar-15	30-mar-15		\$ 249.544.439	19,21%	28,82%	0,070%	30	\$ 5.267.387
01-abr-15	30-abr-15		\$ 249.544.439	19,37%	29,06%	0,071%	30	\$ 5.306.123
01-may-15	30-may-15		\$ 249.544.439	19,37%	29,06%	0,071%	30	\$ 5.306.123
01-jun-15	30-jun-15		\$ 249.544.439	19,37%	29,06%	0,071%	30	\$ 5.306.123
01-jul-15	30-jul-15		\$ 249.544.439	19,26%	28,89%	0,071%	30	\$ 5.279.500
01-ago-15	30-ago-15		\$ 249.544.439	19,26%	28,89%	0,071%	30	\$ 5.279.500
01-sep-15	30-sep-15		\$ 249.544.439	19,26%	28,89%	0,071%	30	\$ 5.279.500
01-oct-15	30-oct-15		\$ 249.544.439	19,33%	29,00%	0,071%	30	\$ 5.296.446
01-nov-15	30-nov-15		\$ 249.544.439	19,33%	29,00%	0,071%	30	\$ 5.296.446
01-dic-15	30-dic-15		\$ 249.544.439	19,33%	29,00%	0,071%	30	\$ 5.296.446
01-ene-16	30-ene-16		\$ 249.544.439	19,68%	29,52%	0,072%	30	\$ 5.380.970
01-feb-16	29-feb-16		\$ 249.544.439	19,68%	29,52%	0,072%	30	\$ 5.380.970
01-mar-16	30-mar-16		\$ 249.544.439	19,68%	29,52%	0,072%	30	\$ 5.380.970
01-abr-16	30-abr-16		\$ 249.544.439	20,54%	30,81%	0,075%	30	\$ 5.587.215
01-may-16	30-may-16		\$ 249.544.439	20,54%	30,81%	0,075%	30	\$ 5.587.215
TOTAL INTERES MORATORIO HASTA LA FECHA DE PAGO								\$ 168.383.552

RESUMEN DE LIQUIDACION	LIQUIDACION DESPACHO	LIQUIDACION RESOLUCION N°4097	SALDO INTERES ADEUDADO
TOTAL INTERES LIQUIDADO A FECHA 30/05/2016	\$ 168.383.552	\$ 122.698.218	\$ 45.685.334

Pretensión de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas

Con relación a la pretensión de liquidación de intereses moratorios sobre las sumas adeudadas, se dirá que en razón a que lo reconocido son justamente esta clase de intereses, no es posible que se genere interés sobre interés. Sin embargo, es dable la mera actualización del valor de la moneda a la época actual, para efectos de que la suma adeudada conserve su valía al momento del pago efectivo, reconociendo que la moneda es objeto de devaluación constante, se

108

hace necesario el ajuste de su valor, para efectos de garantizar que el valor efectivamente pagado corresponda en algo al que otrora se adeudaba.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 6 de julio de 2017, con ponencia del Magistrado Oscar Alfonso Granados Naranjo, refiriéndose a la procedencia de indexación respecto de suma adeudada por intereses, señaló:

“Lo anterior encuentra sustento constitucional en el artículo 230³, por considerar la Sala que no es equitativo someter a una devaluación de la suma adeudada y de esta forma beneficiar la negligencia de la entidad demandada, de igual forma, es preciso traer a colación lo señalado por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el cual refiere lo siguiente:

“ARTICULO 16. VALORACIÓN DE DAÑOS. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”

Descendiendo en el caso sub examine, para el efecto, siendo el valor adeudado por intereses moratorios la suma de \$19.948.700,27, la entidad deberá aplicar la fórmula de índice inicial (diciembre de 2013-fecha de inclusión en nómina) sobre índice final (junio de 2017 fecha de liquidación por esta corporación), para tener presente el valor que se adeuda a la fecha, pues el valor a actualizar será hasta la fecha de pago efectivo”

Así las cosas, precisa el Despacho que en la sentencia en cita el Honorable Tribunal Administrativo ordenó la actualización del valor adeudado por intereses moratorios adeudados **hasta la fecha de pago efectivo**, por lo que la suma reconocida deberá ser indexada entre el 8 de octubre de 2013 y la fecha de su pago efectivo, con la siguiente fórmula:

Formula: $R.H*(I.F/I.I)$

donde: R.H = Valor adeudado por concepto de interes a 30/05/2016

I.I = Certificado por el Dane, vigente a la fecha de pago Resolución 4097

I.F = Certificado por el Dane, Vigente a la fecha de la fecha de mandamiento de pago

De esta manera, el despacho librará mandamiento de pago, modificando el solicitado por la parte actora, pues se efectuará atendiendo la liquidación y las precisiones realizadas, esto es, por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y PESOS (\$45.685.334) M/Cte, suma que deberá ser actualizada a la fecha de pago.

Finalmente, respecto de la pretensión de costas, el Despacho se pronunciará en el momento procesal oportuno.

Otras determinaciones:

Notificación Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

³ Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1365 de 2013, la notificación a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, a la que hace referencia el inciso 6 del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 de autos admisorios de demanda y de mandamientos de pago, únicamente es procedente cuando se trate de procesos donde se encuentren involucrados intereses litigiosos de la Nación, y como en el presente asunto se DEMANDA a la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, se ordenará en su parte resolutive, la notificación a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, en los términos del artículo 197 y 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Reconocimiento de Personería

A folio 1 del expediente, obra poder especial conferido por NUBIA CRISTINA BOHÓRQUEZ NUÑEZ, a favor de la abogada TERESITA DEL PILAR GARCÍA OVIEDO, identificada con cédula de ciudadanía N° 40.034.082 y TP. 292.833 del C. S. de la J, para efectos de promover y llevar hasta su culminación este proceso ejecutivo; por lo cual se le reconocerá personería.

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la señora **NUBIA CRISTINA BOHÓRQUEZ NUÑEZ** en contra de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, por las siguientes sumas de dinero:

- 1. Por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y PESOS (\$45.685.334) M/Cte.**, por concepto de pago de intereses moratorios conforme al artículo 177 del C.C.A., desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha del pago de la condena, con base en la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo dentro del proceso radicado No. 2005-01729, confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá.*
- 2. La anterior suma de dinero deberá ser actualizada atendiendo los parámetros expuestos en la parte motiva de esta providencia, entre el 8 de octubre de 2013 y la fecha en que se realice el pago.*

SEGUNDO.- NOTIFIQUESE personalmente del contenido de esta providencia al representante legal de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL**, de conformidad con los artículos 197 y 199 del C.P.A.C.A, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de esta providencia y de la demanda. Póngasele de presente que las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la secretaría del despacho a su disposición. Hecha la notificación, por secretaría remítasele de manera inmediata y a través de servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago.

TERCERO.- NOTIFIQUESE personalmente el contenido de esta providencia al señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico

para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de la presente providencia y de la demanda.

CUARTO.- NOTIFÍQUESE del contenido de esta providencia a la parte demandante y a su apoderado de conformidad con el artículo 201 del C.P.A.C.A, esto es, por ESTADO.

QUINTO.- La parte actora deberá sufragar los gastos de notificación, consignando la suma de ocho mil quinientos Pesos (\$ 8.500.00) M/CTE, que corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Envío a través del servicio postal autorizado de copia de la demanda, anexos y auto admisorio a NACIÓN – RAMA JUDICIAL.	\$ 8.500
TOTAL	\$ 8.500

Dicho valor deberá ser consignado en la **cuenta de ahorros No. 4-1503-0-21081-1 del Banco Agrario de la ciudad de Tunja, Convenio N° 13226** y acreditar su pago ante la Secretaría del Juzgado, dentro de los cinco (05) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Si al vencimiento del plazo previsto en el artículo 178 del C.P.A.C.A, no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha **desistido** de la demanda y se procederá de conformidad con lo establecido en el precitado artículo.

SEXTO.- Concédase a la parte demandada, el término de cinco (5) días para que dentro de ellos efectúe el pago de la obligación por la cual se le ejecuta, conforme lo señala el artículo 431 del C.G.P. Dicho término comenzarán a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del C.P.A.C.A.

SÉPTIMO.- La parte demandada, cuenta con el término de diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, para proponer excepciones, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 del C.G.P, se reitera que este término, comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del C.P.A.C.A.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA JOHANNA CABARCAS CASTILLO
JUEZA

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO

N° 25 De Hoy 11 de mayo de 2018
a las 8:00 a.m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO